



***MANUAL CONTRATACIÓN PÚBLICA
RESPONSABLE CON CEE DE
INICIATIVA SOCIAL:
Aplicación práctica de cláusulas sociales***

30 de abril de 2011

RESPONSABLE CON CEE DE INICIATIVA SOCIAL:

MANUAL CONTRATACIÓN PÚBLICA Aplicación práctica de cláusulas sociales

CONTENIDOS

1. PRESENTACIÓN
2. CONTENIDO, JUSTIFICACIÓN Y FORMA PRÁCTICA DE UTILIZACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES.
3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN.
4. EJERCICIO PRÁCTICO EN TRES ESCENARIOS.

ANEXO 1: CUANTÍAS MÁXIMAS SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TIPOS CONTRACTUALES.

ANEXO 2: INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 7ª DE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS CLÁUSULAS SOCIALES DE VALORACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN.

ANEXO 3: FUENTES, REFERENCIAS Y LINKS DE INTERÉS



1. PRESENTACIÓN

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa social pueden obtener **nuevas y mejores opciones en la contratación pública** de los productos, obras y servicios que ofertan, por la favorable normativa que supone el actual ordenamiento jurídico en esta materia, tanto a nivel estatal (Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público) como en algunas Comunidades Autónomas y Entes Locales. Se trata de lo que vamos a denominar: **clausulas sociales**.

Sin embargo, la aplicación de estas clausulas sociales no es «per se» de carácter obligatorio para las respectivas Administraciones Públicas. Solo lo será, como es el caso de Navarra, si el respectivo Parlamento así lo establece. Con lo cual **los CEE de iniciativa social**, si quieren aprovechar estas oportunidades, **tienen por delante una triple tarea**:

- A) Conocer las** posibilidades jurídicas de la aplicación de **clausulas sociales** en sus distintas opciones.
- B) Asegurar el nivel de calidad** de sus productos, obras y servicios, así como una buena relación calidad/precio en nuestras ofertas.
- C) Diseñar y aplicar una estrategia de cooperación y comunicación** que permita alcanzar, con éxito, la aplicación de clausulas sociales que faciliten la contratación de nuestros productos, obras y servicios.

Este breve manual aporta información adaptada respecto el primer punto y da algunas pautas para el desarrollo del tercero. En cualquier caso va a ser un trabajo de largo recorrido que pueda dar unos frutos muy valiosos para la creación de más y mejores puestos de trabajo para las personas con trastorno mental severo.

El marco normativo de la contratación pública (Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público) posibilita a las Administraciones Públicas aplicar diversas fórmulas para priorizar la contratación con Centros Especiales de Empleo (CEEs) de iniciativa social.

Así, mediante la aplicación de **CLAUSULAS SOCIALES**:

Además de ser vías perfectamente legales y previstas en nuestro ordenamiento jurídico, representan una **excelente oportunidad para garantizar la viabilidad y la creación de puestos de trabajo** entre un colectivo que tiene unas dificultades especiales para acceder al mundo laboral: las personas con discapacidad.

➤ **EN LA FASE DE ADMISIÓN DE UNA OFERTA:**

Este es el caso que posibilita la aplicación de la **Disposición Adicional Séptima** (contratos reservados a CEEs).

➤ **EN LA FASE DE VALORACIÓN/PUNTUACIÓN DE UNA OFERTA:**

Esta posibilidad es la que se prevé en la **Disposición Adicional Sexta y en el Art. 134.1.**

➤ **EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

Esta posibilidad se recoge en el **Art.102.1.**



2. CONTENIDO, JUSTIFICACIÓN Y FORMA PRÁCTICA DE UTILIZACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES.

Este manual:

- 1) Explica y desarrolla** el contenido, justificación y forma práctica de utilización de estas disposiciones en la contratación. Especialmente, la aplicación preferente de la Disposición Adicional Séptima para contratar CEE de iniciativa social sin ánimo de lucro.
- 2) Presenta ejemplos** de aplicación de la Disposición Adicional Séptima: ya se están produciendo ejemplos de Administraciones (en los ámbitos autonómicos y locales) comprometidos con el desarrollo del empleo protegido.
- 3) Propone 2 ejercicios prácticos:**

ESCENARIO A): Administración Pública abierta/sensible a plantearse la aplicación de la Disposición Adicional Séptima y regular una aplicación favorable.

ESCENARIO B): Administración Pública abierta/sensible a plantearse la aplicación de otras cláusulas sociales (valoración/puntuación, ejecución).

ESCENARIO C): AAPP no sensible a la aplicación de cláusulas sociales: concursos sin aplicación de cláusulas sociales.

A) Formular aspectos básicos de contenido ideal para unos pliegos en un procedimiento de contratación que tengan como consecuencia potencial la contratación a favor de un CEE de iniciativa social.

B) Reflexión conjunta y propuesta de actuaciones más adecuadas en cada caso a los intereses de nuestros CEE en 3 escenarios o alternativas:

Por cláusulas sociales entendemos la inclusión de aspectos sociales en los procesos de contratación pública. En función de la fase de la contratación en que se produce su utilización se diferencian:

1. FASE DE ADMISIÓN:

Cláusulas sociales como requisitos para la admisión de ofertas, explicitadas dentro del propio objeto de contrato.

2. FASE DE PUNTUACIÓN/VALORACIÓN:

Cláusulas sociales como criterios de valoración y adjudicación.

3. FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Cláusulas sociales como criterios de ejecución.



1. FASE DE ADMISIÓN (cláusulas sociales como requisitos para la admisión de ofertas):
Disposición Adicional Séptima.

1. FASE DE ADMISIÓN (cláusulas sociales como requisitos para la admisión de ofertas): Disposición Adicional Séptima.

Esta es la posibilidad que, en relación a CEE, recoge la propia **Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público**: la materia permite la reserva de participación a los CEE en la fase de admisión. Es decir, el objeto del contrato explicita esta reserva: en este caso solo podrán presentar ofertas al concurso las entidades que cumplan el requisito de ser un CEE.

Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (Contratos reservados):

CONCEPTO

“Podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando al menos el 70 % de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición”.

Esta disposición comporta una facultad de carácter potestativo para las Administraciones Públicas de cualquier ámbito (estatal, autonómico o local), que podrán aplicarla mediante la **incorporación expresa en sus procedimientos de adjudicación para la contratación** de suministros, asistencia, servicios o trabajos de cualquier tipo y de cualquier volumen económico.

- Bien por la reserva de participación a CEE: habrá de articularse como una reserva de participación, en el propio objeto del contrato (como requisito para la admisión de cualquier oferta que, excluiría, por lo tanto, la posibilidad de concurrencia con otras entidades que no cumplan la condición de ser CEE).
- Bien por la reserva de su ejecución en el marco de programas de ocupación protegida, cuando al menos el 70 % de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.

En cualquiera de los casos, el anuncio de licitación deberá hacer referencia a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007.

Su incorporación en nuestro ordenamiento se deriva de la transposición directa de las disposiciones de la **Directiva Europea 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (en concreto, de su Artículo 19):**

Art. 19: *Los Estados miembros podrán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a talleres protegidos o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. La presente disposición deberá mencionarse en el anuncio de licitación.*

PRIORIDADES CEEs de iniciativa social

Además, el propio sentido tanto de la Directiva Europea 2004/18/CE y de la Disposición Adicional Séptima, así como de otras referencias, orientan la **preferencia para la aplicación de esta reserva a favor de aquellos CEE que contraten personas con especiales dificultades para acceder a al mercado de trabajo ordinario, como es el caso de la mayoría de personas con trastorno mental severo.**

En este sentido, los CEE de iniciativa social, entre los cuales los afiliados a **FEAFES Empleo**, han de procurar que la aplicación de la disposición adicional 7ª., por parte de la respectiva Administración Pública contratante, se realice con una explícita reserva, o con una combinación de cláusulas de admisión, valoración y ejecución, por aquellos CEE en los que trabajan mayoritariamente personas con discapacidad con especiales dificultades para acceder a un empleo ordinario –se adjunta un **dictamen de referencia** al respecto.

La voluntad de incorporar tales disposiciones en la normativa que rige la contratación pública es la de introducir una acción positiva con respecto a aquellas personas más vulnerables, con mayores dificultades para la inserción laboral –ver art. 8.2. Ley 51/2003, LIONDAU.

El Art. 19 de la Directiva como la **Disposición Adicional Séptima** se refiere expresamente a personas “discapacitadas que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales”. el **Considerando 33 de la Directiva** se refiere a la ocupación de personas que tengan especiales dificultades de inserción. **-la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad 2008-2012** prevé clasificar los CEE en función de criterios tales como la titularidad pública o privada, el ánimo o no de lucro, configurando diferentes regímenes jurídicos para conseguir una mayor funcionalidad (Tema 5.1.) y estudiar un nuevo sistema de incentivos a los CEE, teniendo en cuenta esta diferenciación.

La **Disposición Adicional Sexta de la Ley 30/2007 en su párrafo tercero**, dispone que *podrá establecerse tal preferencia en la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, segundose resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.*

¿COMO REALIZAR SU APLICACIÓN?

¿Cómo realizar una adecuada aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007 a favor de la contratación de CEE en los que trabajan una mayoría de personas con discapacidad con especial dificultad de inserción laboral?:

Uno: Recoger dentro de la/s cláusula/s referida/s A LA FINALIDAD DEL CONTRATO (y no sólo como criterio de valoración y/o ejecución): que el desarrollo de las actividades o servicios que se contraten han de ser realizados u ofertados por entidades que contemplen la condición de ser un CEE en el que trabajan una mayoría de personas con discapacidad con especial dificultad de inserción laboral.

Dos: Mencionar expresamente en el anuncio de licitación que esta contratación pública aplica la reserva de participación para los CEE prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

Tres: Recoger en relación con la tramitación, procedimiento y forma de adjudicación que el procedimiento de adjudicación es el siguiente: **Abierto** (concurso reservado con procedimiento abierto según la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007) de reserva para CEE.

Cuatro: Recoger en las diversas cláusulas de los pliegos administrativos y técnicos la referencia expresa de los CEE registrados de acuerdo con la normativa aplicable (en lugar de referencias generales a personas naturales y jurídicas).

Cinco: Añadir al/ a los Anexo/s y Modelo/s – de Declaración Responsable y similares - un apartado con el siguiente redactado:



- Que se cumpla la condición de es CEE de acuerdo con la normativa aplicable y las condiciones previstas en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
- Que se cumpla la condición que el CEE respectivo tenga una mayoría de trabajadores con discapacidad contratados con especiales dificultades para su inserción laboral en el mercado ordinario de trabajo.



2. FASE DE PUNTUACIÓN/VALORACIÓN (cláusulas sociales como criterios de valoración y adjudicación que suponen una valoración preferente en un concurso respecto a aquellas entidades que los cumplan)

2. FASE DE PUNTUACIÓN/VALORACIÓN (cláusulas sociales como criterios de valoración y adjudicación que suponen una valoración preferente en un concurso respecto a aquellas entidades que los cumplan)

CONCEPTO

Esta posibilidad se recoge en la Disposición Adicional Sexta y Art. 134.1. de la Ley 30/2007:

La Disposición Adicional Sexta (Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro): recoge varios supuestos en los cuales las Administraciones Públicas pueden señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos por varias razones sociales:

1. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

*2. Igualmente podrá establecerse la **preferencia** en la adjudicación de contratos, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente más ventajosas, **para las proposiciones presentadas por aquellas***

empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición Adicional Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 % de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los siguientes colectivos, cuya situación será acreditada por los servicios sociales públicos competentes:

A.- Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma.

B. Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora, o por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.

C. Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de instituciones de protección de menores.

D. Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social.

E. Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos.

F. Personas con discapacidad.

3. En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones **de carácter social o asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato**, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función de sus costes.

4. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo para las proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones iguallen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.

El **Art. 134.1**: establece la posibilidad de recoger cláusulas sociales como criterio de valoración general de las ofertas más ventajosas. Así, dentro de la selección del adjudicatario, entre los criterios de valoración de las ofertas:

*Para la valoración de las proposiciones y **la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato**, tales como la **calidad, el precio**, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con **la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato**, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes.*



3. FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Cláusulas sociales como condiciones de ejecución del contrato.

3. FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Cláusulas sociales como condiciones de ejecución del contrato.

CONCEPTO

Esta posibilidad se recoge en al **Art. 102.1.** de la Ley 30/2007 (recoger cláusulas sociales como condición de ejecución de los contratos que se adjudiquen):

*Así, entre las **condiciones especiales de ejecución del contrato**, los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución **podrán referirse, en especial**, a consideraciones de tipo medioambiental o **a consideraciones de tipo social**, con el fin de **promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral**, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (Art. 102.1.).*

Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la resolución del contrato o para su consideración como infracción grave.



3.-EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Disposición Adicional Séptima (ejemplo I):

- **Comunidad Foral de Navarra: Ley Foral 13/2009, de 9 de noviembre, de modificación del artículo 9 de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos.**

«1. Las entidades públicas sometidas a la Ley Foral deberán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro y Centros de Inserción Socio laboral o reservar su ejecución a determinadas empresas en el marco de programas de empleo protegido cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas o en situación de exclusión social que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias y/o carencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.

2. El importe de los contratos reservados será de un 6 por 100 como mínimo del importe de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.

3. Los anuncios de licitación de los contratos objeto de esta reserva deberán mencionar expresamente la presente disposición».

Nota: en este caso se trata de un desarrollo legislativo que transforma lo potestativo en obligatorio, supone por ello un gran avance y una referencia para otras CCAA. También cabe considerar que la reserva a CEE se hace extensiva a la prevista por la Ley 30/2007, en su disposición adicional sexta, para empresas de inserción social.

Disposición Adicional Séptima (ejemplo II):

- **Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona): Anuncio de contratación pública para el mantenimiento de espacios verdes. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el 18 de octubre de 2008 (BOPB 251. Pág. 28):**

Este Ayuntamiento presenta este anuncio donde recoge como OBJETO DEL CONTRATO lo siguiente:

Descripción del objeto: Contratación mediante concurso reservado con procedimiento abierto (según la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007) de reserva para Centros Especiales de Empleo para la prestación de servicio de mantenimiento de espacios verdes, y del arbolado viario y la pintura de los bancos del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat.

En la tramitación, dispone que el procedimiento de adjudicación es el siguiente: Abierto (concurso reservado con procedimiento abierto según la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007) de reserva para Centros Especiales de Empleo.

El presupuesto base de licitación es el siguiente: 6.425.471,24 euros (IVA incluido).



Disposición Adicional Séptima (ejemplo III)

Anuncio del Departamento de la Vicepresidencia de la Generalitat de Catalunya por el cual se hace pública la licitación de un contrato de servicios con participación reservada a CEE (Publicado en el BOE de 12 de febrero de 2010).

El objeto del contrato es el siguiente: Servicio de limpieza de varios edificios y dependencias adscritos al Departamento de la Vicepresidencia, situados en la ciudad de Girona, con participación reservada a Centros Especiales de Trabajo, en conformidad con la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

El presupuesto base de licitación es el siguiente: Importe: 270.177,60 euros. IVA (%): 16. Importe total: 313.406,02 euros.

Disposición Adicional Séptima (ejemplo IV)

• **Ayuntamiento de Tolosa: Anuncio por el cual se convoca el concurso para la puja pública de la Contratación de Servicios de mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario del municipio de Tolosa (reservado a CEEs). (Publicado en el BOE el 26 de enero de 2010).**

El objeto del contrato es el siguiente: Contratación de servicios de mantenimiento de parques, jardines, zonas verdes y arbolado viario del municipio de Tolosa (reservado a centros especiales de empleo).

El presupuesto base de licitación es el siguiente: a) Importe total: 400.000 euros.

Disposición Adicional Séptima (Ejemplo V)

- **Anuncio de concurso, procedimiento abierto, para la contratación, a un CEE (Disposición Adicional Séptima de la Ley de Contratos del Sector Público), de la gestión, mantenimiento y explotación del Punto Limpio de Astillero (Cantabria). Publicado en el BOC (Boletín Oficial de Cantabria el 25 de mayo de 2009).**

El objeto del contrato es el siguiente: Contratación, a un CEE (Disposición Adicional Séptima de la Ley de Contratos del Sector Público), de la gestión, mantenimiento y explotación del Punto Limpio de Astillero Cantabria.
Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y cuatro mil novecientos veintiocho euros (334.928 euros), IVA no incluido.

Disposición Adicional Séptima (Ejemplo VI)

- **Pliego de cláusulas administrativas particulares que regula el contrato administrativo del servicio de mantenimiento, conservación y mejora zonas verdes y arbolado viario Alcañiz (Teruel).**

Disposiciones generales: En virtud del dispuesto en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, se reserva la participación en esta contratación a CEE , cuando al menos el 70 por ciento de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que debido a la índole o la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.

El objeto del contrato será la realización del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de las zonas verdes y de el arbolado viario de Alcañiz.

Presupuesto de licitación: El presupuesto máximo de licitación de este contrato asciende a la cantidad de 65.545,54 €/año, sin incluir el IVA que deberá soportar la Administración. El importe total del contrato, impuestos incluidos, asciende a la cantidad de 76.032,82 €/año.

OTRAS DISPOSICIONES:

Son múltiples las referencias de interés en la aplicación de cláusulas sociales como criterios de adjudicación y condiciones de ejecución de los contratos públicos. Al respecto, son destacables las siguientes publicaciones y webs donde se recogen ejemplos diversos de aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública:

- ✓ Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable (FUNDACIÓN ONCE, CERMI y GRUPO FUNDOSA).
<http://www.contratacionpublicasocial.com/>
- ✓ El valor añadido del Tercero Sector en la prestación de servicios públicos: Guía práctica de cláusulas sociales en la contratación pública de servicios sociales y d'atención a las personas. TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA.
<http://www.tercersector.cat/admin/repositori/File/Guia%20Clausules/Clausules%20socials%2009.pdf>
- ✓ Herramientas para construir solidaridad. Cláusulas sociales, administraciones públicas y economía alternativa y solidaria. REAS BALEARS.
<http://www.economiasolidaria.org/node/1920>



4.-EJERCICIO PRÁCTICO EN TRES ESCENARIOS DE APLICACIÓN

Se trata de reflexionar y plantear contenidos potenciales de cláusulas sociales y estrategias y actuaciones más adecuadas para los CEE de iniciativa social en 3 posibles escenarios y en relación con los diversos momentos de la contratación:

ESCENARIOS:

ESCENARIO A): Administración Pública abierta/sensible a plantearse la aplicación de la Disposición Adicional Séptima, en condiciones de preferencia para CEE con trabajadores con especial dificultad de inserción laboral.

ESCENARIO B): Administración Pública abierta/sensible a plantearse la aplicación de otras cláusulas sociales (valoración, puntuación, ejecución).

ESCENARIO C): Administración Pública no sensible a la aplicación de cláusulas sociales: concurso sin aplicación de cláusulas sociales.

TIEMPOS:

ANTES DE LA LICITACIÓN: comunicaciones previas, actuaciones de conocimiento y sensibilización, emisión de informes o dictámenes jurídicos, estrategias de cooperación con otras entidades, etc.

DURANTE el procedimiento de contratación: elaboración de una excelente oferta, presentación de la oferta, acreditación precisa de condiciones, etc.

DESPUÉS: ejecución óptima del contrato, supervisión de calidad, etc. O bien, en caso de haber perdido el concurso: análisis en profundidad y nueva estrategia.

4. a.- FORMULAMOS ASPECTOS BÁSICOS DE CONTENIDO IDEAL para unos pliegos en un procedimiento de contratación, y emitimos un informe o dictamen orientado a promover contratación con CEE con personas con mayor dificultad

	PROPUESTA DE CONTENIDO	ELEMENTOS DE ARGUMENTACIÓN
Elementos a incorporar como requisitos de admisión		
Elementos a incorporar como requisitos de valoración (para obtener mejor puntuación)		
Elementos a incorporar como requisitos de ejecución o cumplimiento		

4. b.- NOS PLANTEAMOS LAS CUESTIONES PARA LA REFLEXIÓN DEL DEBATE:

1. ¿Cuál es el escenario en el área territorial dónde desarrolla su actividad el CEE? ¿Puedes concurrir solo? ¿Has de establecer marcos de alianza y cooperación con otros CEE o empresas de inserción social sin ánimo de lucro?
2. ¿Qué oportunidades, retos, aspectos positivos, dificultades, consideras que se pueden presentar para plantear la aplicación de la Disposición Adicional Séptima o la aplicación de otras cláusulas sociales? ¿Qué disposición manifiestan los responsables políticos de los respectivos entes locales o Comunidad Autónoma? ¿Y los funcionarios: secretarios, responsables de contratación, etc.?
3. ¿Qué estrategias y actuaciones consideráis necesario desarrollar para mejorar las posibilidades de aplicación de cláusulas sociales por parte de las Administraciones Públicas según escenarios posibles?

TIEMPOS:	ESCENARIO A) Disp. Ad. 7ª o combinado con Disp. Ad. 6ª	ESCENARIO B) Otras cláusulas sociales de valoración y ejecución	ESCENARIO C) Concurso sin cláusulas sociales
ANTES: Comunicaciones previas, actuaciones de conocimiento y sensibilización, dictámenes, informes, estrategias de cooperación con otras entidades,...			
DURANTE: Elaboración y presentación de oferta, acreditación de condiciones,...			
DESPUÉS: Ejecución del contrato, reflexión y actualización estrategia...			

Realizamos y compartimos una estrategia coherente con nuestra misión y valores:

- 1) En función de la valoración previa, y el escenario que nos encontramos, definimos la visión ideal de lo que queremos alcanzar en materia de aplicación de cláusulas sociales por parte de la Administraciones Públicas de nuestro entorno territorial -ello tanto a nivel de las que nos pueden contratar como de la posibilidad de nuevos ordenamientos –ver Navarra-.
- 2) Realizamos un diagnóstico estratégico, mediante una técnica tipo DAFO, a partir de detectar que factores externos e internos pueden favorecer o dificultar el alcance de la visión previamente formulada.
- 3) Concretamos la estrategia óptima con los objetivos concretos a alcanzar y las acciones a realizar, asignando las mismas a responsables de su ejecución en tiempo y forma adecuada.



ANEXO 1



CUANTIAS MÁXIMAS SEGÚN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TIPOS CONTRACTUALES

CONTRATO MENOR

Se adjudica directamente. La tramitación del expediente sólo exige la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.

- ✓ Cuando se trate de contratos de obras: contratos de importe inferior a 50.000,00 € + IVA
- ✓ Cuando se trate de otros contratos: contratos de importe inferior a 18.000,00 € + IVA.

Arts. 95 y 122

IVA: Art. 76.1 y Circular Abogacía Estado 3/2008

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

La adjudicación recae en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, después de efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.

- ✓ Cuando se trate de contratos de obras: cuando su valor requerido sea inferior a 1.000.000,00 €+IVA.
- ✓ Cuando se trate de contratos de gestión de servicios públicos: el presupuesto de los cuales de gastos de primer establecimiento se prevea inferior a 500.000,00 €+IVA y su plazo de duración sea inferior a cinco años.
- ✓ Cuando se trate de otros contratos: cuando su valor requerido sea inferior 100.000,00 € + IVA.

Arts. 153 a 159

IVA: Art. 76.1 y Circular Abogacía Estado 3/2008



ANEXO 2

INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 7ª DE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS CLÁUSULAS SOCIALES DE VALORACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN



CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN

2. FASE DE ADMISIÓN (CLÁUSULAS SOCIALES COMO REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTAS): DISPOSICIÓN ADICIONAL SEPTIMA (I)

3. FASE DE PUNTUACIÓN/VALORACIÓN (CLÁUSULAS SOCIALES COMO CRITERIOS DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN QUE SUPONEN UNA VALORACIÓN PREFERENTE EN UN CONCURSO RESPECTO A AQUELLAS ENTIDADES QUE LOS CUMPLAN)

4. FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: CLAUSULAS SOCIALES COMO CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

5. CONCLUSIONES

1. PRESENTACIÓN:

El marco normativo de la contratación pública (Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) posibilita a las Administraciones Públicas aplicar varias fórmulas para priorizar la contratación con Centros Especiales de Empleo (CEEs) de iniciativa social.

Así, mediante la aplicación de **CLÁUSULAS SOCIALES**:

- EN LA FASE DE ADMISIÓN DE UNA OFERTA: este es el caso que posibilita la aplicación de la **Disposición Adicional Séptima** (contratos reservados a CEEs).
- EN LA FASE DE VALORACIÓN/PUNTUACIÓN DE UNA OFERTA: esta posibilidad es la que prevé la **Disposición Adicional Sexta y el Art. 134.1**.
- EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: esta posibilidad se recoge en el **Art. 102.1**.

Además de ser vías perfectamente legales y previstas en nuestro ordenamiento jurídico, representan una **excelente oportunidad para garantizar la viabilidad y la creación de puestos de trabajo** entre un colectivo que sufre unas especiales dificultades para acceder al mundo laboral:

“las personas con discapacidad y, de manera especial, las personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales”.

En este sentido, por cláusulas sociales entendemos la inclusión de aspectos sociales en los procesos de contratación pública que, de acuerdo con el objeto del contrato que se plantea, supongan beneficios de carácter social y de interés general.

En función de la fase de la contratación en que se produce su utilización se pueden diferenciar:

1. FASE DE ADMISIÓN: Cláusulas sociales como requisitos para la admisión de ofertas, explicitadas dentro del propio objeto del contrato.
2. FASE DE PUNTUACIÓN/VALORACIÓN: Cláusulas sociales como criterios de valoración y adjudicación.
3. FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Cláusulas sociales como criterios de ejecución.

2. FASE DE ADMISIÓN (cláusulas sociales como requisitos para la admisión de ofertas): DISPOSICIÓN ADICIONAL SEPTIMA

Esta es la posibilidad que recoge la **Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público**: la misma permite la reserva de participación a los Centros Especiales de Empleo en la fase de admisión de un proceso de contratación pública. Es decir, el objeto del contrato es el que explicita esta reserva y, por lo tanto, no puede presentar oferta al concurso ninguna entidad o empresa que no cumpla el requisito de ser un CEE debidamente registrado.

Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (Contratos reservados):

“Podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando al menos el 70 % de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición”.

Esta Disposición constituye una importante novedad del marco jurídico de contratación jurídico público-privado en nuestro país. De hecho, el anterior texto normativo (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) no recogía esta posibilidad. Su Disposición Adicional Octava (Contratación con empresas que tengan en su plantilla minusválidos y con entidades sin ánimo de lucro) únicamente recogía una parte del contenido actual de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 30/2007 (Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro).

Su incorporación en nuestro ordenamiento se deriva de la transposición directa de las disposiciones de la **Directiva Europea 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios** (en concreto, de su Artículo 19):

Art. 19: *Los Estados miembros podrán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a talleres protegidos o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. La presente disposición deberá mencionarse en el anuncio de licitación.*

Entre ambas disposiciones se observa una importante diferencia que abre el camino hacia una interpretación cualitativa amplia de la Disposición Adicional Séptima:

- La disposición estatal establece un umbral concreto de un mínimo de un 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.
- Mientras que el Art. 19 de la Directiva Europea habla de una mayoría, que podría interpretarse como un 51%.

Esta precisión, como exponemos a continuación, conduce a la conclusión de que **el concurso público que, utilizando la vía de la Disposición Adicional Séptima de la ley 30/2007, oriente la concurrencia a aquellas entidades que cumplan el requisito de ser Centro Especial de Trabajo, también habrían de incluir los requisitos siguientes:**

1. Que, como mínimo el 70% de los trabajadores o trabajadoras del CEE sean personas con discapacidad que, de acuerdo con la normativa vigente que regula el trabajo protegido, no pueden ejercer una actividad profesional en condiciones normales para acceder al mercado de trabajo ordinario.
2. Que, al menos, el 51% -la mayoría- de los trabajadores o trabajadoras del CEE, tengan una especial dificultad para acceder al mercado de trabajo ordinario debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, necesitando por tanto el apoyo de un equipo multidisciplinar para desarrollar su trabajo en el CEE (como por ejemplo es el caso de las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo previstas en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo).

Y esto supondría realizar las **verificaciones** siguientes:

- a. Que se compruebe el cumplimiento del requisito primero sobre la acreditación adecuada de que, al menos, el 70% de los trabajadores o trabajadoras del CEE disponen de certificado de reconocimiento del grado de discapacidad igual o superior al 33%.
- b. Que se compruebe el cumplimiento del requisito segundo: que la mayoría de los trabajadores o trabajadoras del CEE, el 51%, tengan una especial dificultad para acceder al mercado de trabajo ordinario debido a la índole o la gravedad de sus deficiencias, considerando entre estas personas las destinatarias de las unidades de apoyo a la actividad profesional (equipos multiprofesionales enmarcados dentro de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo), entre las cuales se encuentran:

- ✓ Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.
- ✓ Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.

En cualquier caso, esta disposición comporta una facultad de carácter potestativo para las Administraciones Públicas de cualquier ámbito (estatal, autonómico o local), que podrán aplicarla mediante la **incorporación expresa en sus procedimientos de adjudicación para la contratación** de suministros, asistencia, servicios o trabajos de cualquier tipo y de cualquier volumen económico, en tres **alternativas** posibles:

- La reserva de participación en el respectivo concurso público a CEEs, sin diferenciar el tipo de CEEs y sus características: habrá de articularse como una reserva de participación, en el propio objeto del contrato (como requisito para la admisión de cualquier oferta que, excluiría, por lo tanto, la posibilidad de concurrencia con otras entidades que no cumplan la condición de ser CEEs)
- La reserva de participación en el respectivo concurso público a programas de ocupación protegida, cuando al menos el 70 % de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.
- La reserva de participación en el respectivo concurso público a CEEs, cuando al menos el 70 % de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales y la mayoría tengan una discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias requiere del apoyo de un equipo multiprofesional (**unidades de apoyo a la actividad profesional**), también en este caso habrá de articularse como una reserva de participación, en el propio objeto del contrato (como requisito para la admisión de cualquier oferta que, excluiría, por lo tanto, la posibilidad de concurrencia con otras entidades que no cumplan la condición de ser CEE).

Como **conclusión**, consideramos que esta tercera alternativa es la más coherente y consistente en relación a la normativa –Disposición Adicional Séptima y Art. 19 de la Directiva Europea - que regula la utilización de esta cláusula social de admisión a un concurso público para la contratación a CEEs para la prestación de suministros, asistencia, servicios o trabajos de cualquier tipo. En cualquiera de los casos, el anuncio de licitación deberá hacer referencia a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007.

Cómo realizar una adecuada aplicación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007 para la reserva de contratación de CEEs – en relación con la tercera alternativa antes expuesta -:

Uno: Recoger dentro de la/s cláusula/s referida/s a LA FINALIDAD U OBJETO DEL CONTRATO (y no sólo como criterio de valoración y/o de ejecución): que el objeto del contrato es fomentar el empleo de personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales, de forma que el desarrollo de las actividades o servicios que se contratarían deben ser realizadas u ofertadas para entidades que cumplan la condición de ser Centro Especial de Empleo.

Dos: Establecer, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Séptima, que los CEEs que concurren acrediten que, como mínimo, el 70% de los trabajadores o trabajadoras del CEE, son personas con discapacidad, que de acuerdo con la normativa vigente que regula el trabajo protegido, no pueden ejercer una actividad profesional en condiciones normales para su acceso al mercado de trabajo ordinario.

Tres: Establecer que los CEEs que concurren acrediten que, como mínimo, el 51% -la mayoría- de los trabajadores o trabajadoras del CEE, tengan una especial dificultad para acceder al mercado de trabajo ordinario debido a la índole o la gravedad de sus deficiencias, necesitando el apoyo de un equipo multiprofesional para desarrollar su trabajo en el CEE, como por ejemplo es el caso de las unidades de apoyo a la actividad profesional.

Cuatro: Mencionar expresamente en el anuncio de puja que esta contratación pública aplica la reserva de participación para CEEs prevista en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

Cinco: Recoger en relación con la tramitación, procedimiento y forma de adjudicación que el procedimiento de adjudicación es el siguiente: Abierto (concurso reservado con procedimiento abierto según la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007) de reserva para CEEs que cumplan los requisitos establecidos.

Seis: Recoger en las diversas cláusulas de los pliegos administrativos y técnicos la referencia expresa a que los CEEs han de estar registrados como tales en los registros pertinentes de acuerdo con la normativa aplicable (en lugar de referencias generales a personas naturales y jurídicas).

Siete: Añadir entre los Anexos, con los correspondientes Modelos de Declaración Responsable y similares - un apartado con el siguiente redactado:

- a) Que se cumpla y se acredite la condición de CEE de acuerdo con la normativa aplicable y las condiciones previstas a la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
- b) Que se cumpla y se acredite el requisito de que, al menos, el 70% de los trabajadores o trabajadoras del CEE disponen de certificado de reconocimiento del grado de discapacidad igual o superior al 33%.
- c) Que se cumpla y se acredite el requisito de que la mayoría de los trabajadores o trabajadoras del CEE, el 51%, tengan una especial dificultad para acceder al mercado de trabajo ordinario debido a la índole o la gravedad de sus

deficiencias, considerando entre estas personas las destinatarias de las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo previstas en el Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de Empleo, entre las cuales se encuentran las siguientes:

- ✓ Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.
- ✓ Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.

3. FASE DE PUNTUACIÓN/VALORACIÓN (cláusulas sociales como criterios de valoración y adjudicación que suponen una valoración preferente en un concurso respecto a aquellas entidades que los cumplan)

En un concurso público realizado en el marco de la aplicación de la Disposición Adicional Séptima analizada en el epígrafe anterior, también se pueden añadir cláusulas sociales de valoración o puntuación para la adjudicación del respectivo contrato.

Esta posibilidad se recoge en la Disposición Adicional Sexta y Art. 134.1. de la Ley 30/2007:

La **Disposición Adicional Sexta** (Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro): recoge varios supuestos en los cuales las Administraciones Públicas pueden señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos por varias razones sociales:

1. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 %, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

2. Igualmente podrá establecerse la **preferencia** en la adjudicación de contratos, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente más ventajosas, **para las proposiciones presentadas por aquellas empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social**, reguladas en la Disposición Adicional Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 % de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los siguientes colectivos, cuya situación será acreditada por los servicios sociales públicos competentes:

- Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma.
- Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora, o por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
- Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de instituciones de protección de menores.
- Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social.
- Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos.
- Personas con discapacidad.

*3. En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones **de carácter social o asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato**, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función de sus costes.*

4. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo para las proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones iguallen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.

El **Art. 134.1**: establece la posibilidad de recoger cláusulas sociales como criterio de valoración general de las ofertas más ventajosas. Así, dentro de la selección del adjudicatario, entre los criterios de valoración de las ofertas:

*Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá **atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato**, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales **o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar**, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes.*

Una interpretación literal de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 30/2007, nos podría llevar a considerar la incorporación estas cláusulas sociales de valoración entre las cláusulas administrativas para la adjudicación de un concurso público como un mecanismo de desempate en caso de igualdad de ofertas económicas. Realizándose, en este caso, una interpretación muy restrictiva y, a nuestras parecer, desacertada, del que se puede entender y evaluar como la oferta económicamente más ventajosa.

En este sentido, entendemos que **la interpretación del concepto de oferta económica más ventajosa debe realizarse a la luz del artículo 134.1**. Por ello, las consideraciones primordiales para seleccionar las potenciales cláusulas sociales de valoración para la adjudicación serían, tratándose de un contrato – planteado en el marco de la Disposición Adicional Séptima y, por lo tanto, teniendo como objeto la contratación de Centros Especiales de Trabajo que, a la vez, tengan como principal finalidad el empleo de personas con discapacidad con especiales dificultades - los siguientes:

- 1.** Que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las cuales pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales.
- 2.** La calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones vinculadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales.
- 3.** La rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los recambios, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros parecidos.

Cómo realizar una adecuada aplicación de la Disposición Adicional Sexta y el artículo 134 de la Ley 30/2007 en favor de la contratación de CEEs – en la tercera alternativa antes expuesta-:

En este caso y siguiendo el razonamiento anterior, consideramos como suficiente, a efectos de cláusula social de un concurso regulado según lo que prevé la Disposición Adicional Séptima y **atendiendo a criterios directamente vinculados a la finalidad del contrato** –como establece el artículo 134.1 de la ley 30/2007- recoger el conjunto de actuaciones, dispositivos, servicios profesionales y otras medidas de que el respectivo CEE dispone para responder a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las cuales pertenecen las personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. Y en este sentido, entre otras, se valorarán:

1. El número de monitores/as o auxiliares de monitor – en jornada completa/año – contratados/as para el apoyo de las personas con discapacidad, con un reconocimiento de grado igual o superior al 33%, contratadas en el CEE para la realización del contrato previsto. – hará falta concretar la fórmula de valoración y los puntos que se adjudican.
2. El número de profesionales de los servicios de ajuste personal y social de las unidades de apoyo a la actividad profesional -en jornada completa/año- contratados para el apoyo de las personas con una especial dificultad para acceder al mercado de trabajo ordinario debido a la índole o la gravedad de sus deficiencias, considerando entre éstas a las personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% y a las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%. Esto respecto a las personas que se prevé realizarán las tareas relacionadas con el contrato objeto de este concurso. –hará falta concretar la formula de valoración y los puntos que se adjudican-.

3. El número de personas con discapacidad, y reconocimiento de grado igual o superior al 33%, contratadas en el respectivo CEE que supere el requisito mínimo del 70% de la plantilla. Hará falta concretar la formula de valoración y los puntos que se adjudican.

4. El número de personas con discapacidad física o sensorial con reconocimiento de grado igual o superior al 65% o con discapacidad intelectual, mental o parálisis cerebral con un reconocimiento de grado igual o superior al 33%, contratadas por el respectivo CEE que supere el requisito mínimo del 51% de la plantilla.

Hará falta concretar la formula de valoración y el número de puntos que se adjudican.

Finalmente, y previendo la eventualidad de un empate de puntuación de varias entidades o empresas en la valoración de la oferta económicamente más ventajosa – según lo ya propuesto anteriormente y una vez aplicadas las cláusulas sociales de valoración antes descritas. Haría falta incluir una cláusula fundamentada en la Disposición Adicional Sexta, párrafo tercero de la Ley 30/2007), según la cual conste que la preferencia sería **para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato.**

En este punto del informe consideramos necesario, siguiendo a Santiago Lesmes Zabalegui, uno de los precursores en la difusión y defensa de la aplicación de las cláusulas sociales en el Estado español, recoger las consideraciones siguientes:

“Considerando que se trata de una fase del procedimiento en la que resulta preciso un mayor cuidado para la inclusión de cláusulas sociales, reiteramos las advertencias:

- *La legislación de contratos admite incorporar con criterios de valoración de las ofertas de carácter social y admite igualmente la posibilidad de hacerlo a través de mejoras o variantes, pero no resulta posible hacerlo con carácter general en un Pliego de Condiciones Generales o incluyendo el mismo criterio para todos los contratos, sino que deben adaptarse a las características y la singularidad de cada contrato, y estar ineludiblemente vinculados al objeto del contrato. De ahí la importancia de incorporar al objeto contractual las cuestiones sociales.*
- *Los criterios serán objetivos y cuantificables, de modo que no supongan para el poder adjudicador un poder incondicional de elección o un criterio de selección encubierto. Por lo tanto no debería bastar con indicar que se valorará -por ejemplo- la inserción laboral, sino concretar si se valorará el número o porcentaje de personas desfavorecidas del mercado laboral que se contratarán, el diseño de itinerarios personalizados de inserción, el personal especializados en acompañamiento o tutorización, etc.*
- *No se pueden valorar las características de la empresa en su conjunto sino sólo respecto a las personas que trabajarán en su ejecución o sobre el modo en que la empresa va a ejecutar el contrato.*
- *La valoración de los criterios sociales debe ponderarse y ser proporcional a la naturaleza y objeto de la prestación contractual, respondiendo a las necesidades del contrato y al interés público. Esta cuestión determina la conveniencia de incluir referencias sociales en la justificación del expediente y en la idoneidad y necesidad del contrato.*
- *Obviamente deben respetar los principios fundamentales del Derecho comunitario y en particular el principio de no discriminación, lo que impide establecer criterios de valoración para una determinada tipología de entidades, ni por supuesto para la empresas locales o nacionales.*

- *Por último, deben satisfacer exigencias sociales de población especialmente desfavorecida que sea beneficiaria o usuaria de las prestaciones a contratar. E interpretamos que encajan en tal definición las personas desempleadas, las mujeres (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres), las personas con discapacidad (ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos), las personas en situación o riesgo de exclusión social (Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción), las personas precarizadas laboralmente o la población de países empobrecidos (en el caso de productos de comercio justo o cumplimiento de las Convenciones de la OIT) y otros análogos.”*

INFORME TÉCNICO JURÍDICO SOBRE LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES DE LA RED RETOS DE TERRITORIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES.

4. FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Cláusulas sociales como condiciones de ejecución del contrato.

Esta posibilidad se recoge en al Art. 102.1. de la Ley 30/2007 (recoger cláusulas sociales como condición de ejecución de los contratos que se adjudiquen):

Así, entre las **condiciones especiales de ejecución del contrato**, *los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución **podrán referirse**, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a **consideraciones de tipo social**, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (Art. 102.1.).*

Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la resolución del contrato o para su consideración como infracción grave.

Consideramos que esta Disposición se debe interpretar a la luz de lo previsto en el **Art. 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad** (Trabajo y ocupación):

*“los Estados Miembro reconocen el **derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones** con las otras; esto incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Miembro salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante la ocupación, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:*

- a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de ocupación, incluidas las condiciones de selección, contratación y ocupación, la continuidad en la ocupación, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables.*
- b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las otras, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos.*
- c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con el resto.*
- d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;*

- e) Alentar las oportunidades de ocupación y la promoción profesional de las personas con discapacidad al mercado laboral y apoyar a la búsqueda, obtención, mantenimiento del trabajo y retorno a este.*
- f) Promover oportunidades empresariales, de ocupación por cuenta propia f) Promover oportunidades empresariales, de ocupación por cuenta propia. de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias.*
- g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;*
- h) Promover la ocupación de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas.*
- i) Velar porque se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el puesto de trabajo;*
- j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo ordinario;*
- k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento de la ocupación y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad”.*

Teniendo en cuenta el contenido de este Art. 27 de la Convención, se puede afirmar que la exigencia de cumplimiento de condiciones de ejecución previstas en los respectivos pliegos del concurso, no sólo son una posibilidad disponible para la Administración adjudicataria, sino que, además, pueden favorecer una mejor eficacia en la consecución del objeto del propio contrato. Teniendo en cuenta que se trata de condiciones que, en cualquier caso, corresponderá cumplir a la entidad adjudicataria del contrato

– en el caso analizado, el titular del CEE en las condiciones previstas en el respectivo concurso y mejor valoradas dentro de los que hayan acreditado los requisitos especificados.

Entre las posibles condiciones de ejecución podrían contarse:

1. Subcontratar un porcentaje del importe de adjudicación con CEEs de la comarca dónde se ejecuta el contrato, que cumplan las condiciones y requisitos del concurso, de forma que:

- Como mínimo el 70% de los trabajadores o trabajadoras del CEE que se subcontrate sean personas con discapacidad, que de acuerdo con la normativa vigente que regula el trabajo protegido, no pueden ejercer una actividad profesional en condiciones normales por su acceso al mercado de trabajo ordinario.
- Como mínimo el 51% -la mayoría- de los trabajadores o trabajadoras del CEE que se subcontrate, tengan una especial dificultad por acceder al mercado de trabajo ordinario por causa de la índole o la gravedad de sus deficiencias, necesitando el apoyo de un equipo multidisciplinar para su trabajo en el Centro, como por ejemplo es el caso de las unidades de apoyo.

Todo ello con la finalidad de evitar justamente el efecto contrario del objeto del contrato:

La pérdida de puestos de trabajo de personas con discapacidad que tienen unas especiales dificultades para conseguir un puesto de trabajo.

Sería necesario concretar el porcentaje razonable de la subcontratación de estos CEEs, así como las penalizaciones en caso de incumplimiento, que podrían incluso significar la consideración de una infracción grave y la resolución del contrato. En cualquier caso podría ser gradual; por ejemplo: si la subcontratación a CEEs de la comarca se fija en un 50% del importe total de adjudicación, un incumplimiento del 10% podría significar una

penalización equivalente al 5% del contrato, un 20% el 10% del total adjudicado y así sucesivamente hasta que un incumplimiento del 30% o superior debería comportar la resolución del mismo.

2. La aplicación, si previamente no se dispone, de medidas de conciliación y de un plan de igualdad en un plazo máximo de un tiempo razonable desde la adjudicación del contrato. Podría ser un mínimo de 6 meses y un máximo de un año.

3. Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y aplicar medidas de seguridad y salud laboral.

Por último, destacar que entre las **prohibiciones de contratar** previstas en su **Artículo 49.1**. se dispone que *“no podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:*

c) “...haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social...”.

5. CONCLUSIONES

Como punto final de este informe podemos concluir que la posibilidad de aplicar la Disposición Adicional Séptima de la Ley 30/2007, añadiendo otras cláusulas sociales de valoración y ejecución, puede ser una excelente vía por atender finalidades sociales de interés general, siempre y cuando estas se orienten a:

- ✓ Contratar CEEs donde el 70% de los trabajadores/as afectados/as sean personas con discapacidad que no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales y, cuando al menos el 51% -la mayoría- de los trabajadores o trabajadoras del CEEs, tengan una especial dificultad para acceder al mercado de trabajo ordinario debido a la índole o la gravedad de sus deficiencias, necesitando el apoyo de un equipo multiprofesional para su trabajo en el propio CEE, como por ejemplo es el caso de las unidades de apoyo a la actividad profesional.



ANEXO 3



FUENTES, REFERENCIAS Y LINKS DE INTERÉS



1. FUENTES

I Jornadas de Feafes Empleo "HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL", Madrid, 24 de Febrero de 2011

- Ponente.- D. Víctor Bayarri (Director Alter Civites S.L.)
info@altercivites.com
www.altercivites.com
- Experiencia.-D. Jesús Ángel Gastón (CEE ELKARKIDE)
www.elkarkide.com

2. REFERENCIAS NORMATIVAS:

- Ley 12/2007 Servicios Sociales de Catalunya.
<http://www.gencat.cat/diari/4990/07284064.htm>
- Ley 30/2007 de Contratas del Sector Público.
<http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/31/pdfs/A44336-44436.pdf>
- Ley 38/2003 General de Subvenciones.
<http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40505-40532.pdf>
- Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y Protocolo Facultativo en la Convención.
Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad realizado en Nueva York el 13 de diciembre del 2006.
Instrumento de Ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, realizado en Nova York el 13 de diciembre del 2006. BOE 22 abril 2008.
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
<http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf>
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
http://www.imserso.es/dependencia_01/autonomia_dependencia/texto_ley/index.htm

- La Gobernanza Europea. Un Libro Blanco. Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 25.7.2001 COM (2001) 428 final.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf

- Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de Marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.

<http://simap.europa.eu/docs/simap/nomenclature/32004118es.pdf>

- Resolución 6/2008, de 2 de Junio, del Director de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, para la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno “sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público.

<http://www.economiasolidaria.org/files/BOPV081619CCSS.pdf>

Estrategia Global de Acción para el Empleo de las personas con discapacidad: 2008-2012.

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20699/estrategia_empleo.pdf

Plan de Acción 2009-2010 (Estrategia Global de Acción para el Empleo de las personas con discapacidad 2008-2012).

http://www.msps.es/politicaSocial/discapacidad/docs/2009_plan_accion_estrategia_2009_2010.pdf

El valor del Tercer Sector en la prestación de servicios públicos:

Guía práctica de cláusulas sociales en la contratación pública de servicios sociales y de atención a las personas.

TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA.

<http://www.tercersector.cat/admin/repositori/File/Guia%20Clausules/Clausules%20socials%2009.pdf>



Herramientas para construir solidaridad. Cláusulas sociales, administraciones públicas y economía alternativa y solidaria. REAS BALEARIS.

<http://www.economiasolidaria.org/node/1920>

Manual de Cláusulas sociales de la FUNDACIÓN GAZTELAN.

<http://www.gaztelan.org/cmanual.php>



3. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y DOCUMENTALES

La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Estudio sistemático. José Antonio Moreno Molina i Francisco Pleite Guadamillas. Editorial La Ley.

Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable (FUNDACIÓN ONCE, CERMI y GRUPO FUNDOSA).

<http://www.contratacionpublicasocial.com/>

El valor añadido del Tercero Sector en la prestación de servicios públicos: Guía práctica de cláusulas sociales en la contratación pública de servicios sociales y d'atención a las personas. MESA

D'ENTIDADES DEL TERCERO SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA.

<http://www.tercersector.cat/admin/repositori/File/Guia%20Clausules/Clausules%20socials%2009.pdf>

Herramientas para construir solidaridad. Cláusulas sociales, administraciones públicas y economía alternativa y solidaria. REAS BALEARES.

<http://www.economiasolidaria.org/node/1920>



BBVA



C\ Hernández Mas, 20-24. Madrid

e-mail: gerencia@feafesempleo.org

web: <http://www.feafesempleo.org>

Telf. 606 813351